EXPEDIENTES No.: ****, ****, **** Y

QUEJOSOS: QV1, QV2, Q3 y Q4
AGRAVIADOS: QV1, QV2, V3 y V4
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN
20/2015

AUTORIDAD
DESTINATARIA: H. AYUNTAMIENTO DE
MAZATLÁN, SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 23 de abril de 2015

ING. CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN, SINALOA.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 3º; 4º Bis; 4º Bis C y 77 Bis de la Constitución Política del Estado; 1º; 2º; 3º; 7º; 16; 27; 28 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha analizado el contenido de los expedientes números ****, ****, **** y ****, relacionados con las quejas en donde figuran como víctimas QV1, QV2, V3 y V4.

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo segundo y 51, ambos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y 10 de su reglamento interno. Dichos datos se pondrán en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un listado adjunto en que se describe el significado de las claves utilizadas, previo el compromiso de que ésta dicte las medidas de protección correspondientes; y, visto los siguientes:

I. HECHOS

Expediente ****

El 20 de junio de 2012, esta CEDH recibió el escrito de queja suscrito por el señor QV1, en el cual hizo del conocimiento a este organismo presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su agravo, atribuidas a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

En dicho escrito manifestó que el 18 de junio de 2012, agentes de la mencionada corporación policiaca lo detuvieron y lo sometieron a golpes y tortura, resultando con diversas lesiones graves que trastocaron su integridad física.

Señaló que previo a su detención tuvo problemas con un comandante de la policía y que éste le dijo que le sembraría droga para meterlo a la cárcel, por lo que llegaron los agentes e ingresaron a su domicilio, comenzando a golpearlo, logrando soltarse y corrió hacia la marisma para que ya no lo siguieran golpeando, lugar en el que le dieron alcance, golpeándolo aún más, además de que un agente se golpeó en su cara con una vara de mangle y en el informe policial dijo que él lo había golpeado.

Expediente ****

El 6 de febrero de 2013, esta Comisión recibió el escrito de queja suscrito por el señor QV2, en el cual hizo del conocimiento a este organismo presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, atribuidas a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

En su escrito manifestó que el 5 de febrero de 2013, agentes de la corporación policiaca referida lo detuvieron, quienes únicamente le encontraron dos envoltorios con marihuana, las cuales quería para su consumo.

Dijo que al momento de detenerlo le rociaron gas lacrimógeno en los ojos y la nariz, para inmediatamente después golpearlo sin ninguna causa justificada, ocasionándole múltiples lesiones en su integridad física, para posteriormente trasladarlo hasta el Tribunal de Barandilla y después ante el Ministerio Público Federal, en donde fue informado que se le acusaba de posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de posesión de marihuana y metanfetamina, lo cual resultaba completamente falso, señalando que a él sólo le fue asegurada marihuana.

Expediente ****

El 2 de mayo de 2013, este organismo constitucional autónomo recibió el escrito de queja suscrito por la señora Q3, en el cual hizo del conocimiento presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de V3, atribuidas a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

En dicho escrito, la quejosa refirió que el 1º de mayo de 2013, viajaba en un vehículo particular en compañía de sus padres, el cual era conducido por V3, cuando de pronto la rodearon dos patrullas de la policía municipal, quienes ordenaron a V3 que se bajara del vehículo, según para realizarle una revisión de rutina, pero luego decidieron que lo llevarían detenido.

Señaló que en virtud de que nadie más a bordo del vehículo sabía conducir, un agente de policía condujo su vehículo hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, en donde fueron informados que supuestamente V3 quería asaltarlos a ella y a sus bisabuelos, y que además le habían encontrado droga, lo cual resultaba ser completamente falso, pero que no obstante a ello, fue puesto a disposición del Ministerio Público, además manifestó que V3 fue golpeado por los agentes de policía.

Expediente ****

El 21 de mayo de 2013, esta Comisión recibió el escrito de queja suscrito por Q4, en el cual hizo del conocimiento presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de V4 y T1, atribuidas a elementos de la Policía Preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa.

En su escrito, la quejosa manifestó acudir a este organismo a interponer formal queja por presuntas violaciones a derechos humanos en favor de sus defendidos V4 y T1, quienes el 19 de mayo de 2013 fueron puestos a disposición del representante social federal por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

Abundó señalando que al dictamen médico practicado por el perito oficial de la Procuraduría General de la República se advirtió que ambos presentaban lesiones en su economía corporal, atribuibles a sus aprehensores.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

Expediente ****

1. Escrito recibido ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos el 20 de junio de 2012, mediante el cual el señor QV1 hizo del conocimiento a este organismo presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, atribuidas a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

2. Escrito recibido ante esta CEDH el 15 de agosto de 2012, por el cual el Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa presentó formal queja a favor de QV1, por los mismos hechos que se señalan en el punto anterior.

3. Oficio número **** de fecha 6 de septiembre de 2012, mediante el cual se solicitó al Coordinador del Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento de

Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

4. Acta circunstanciada en la cual personal de esta Comisión hizo constar que se trasladó hasta el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, con la finalidad de entrevistar a QV1, sin lograr tal propósito, ya que fueron informados que éste había obtenido su libertad.

5. Oficio número **** de fecha 11 de septiembre de 2012, mediante el cual se solicitó al Secretario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, el informe de ley relacionado con los actos motivo de la queja.

6. Oficio número ****, recibido ante esta Comisión el 28 de septiembre de 2012, por el cual el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán informó que esa dependencia a su cargo contaba con registro de detención de QV1, atento a los hechos ocurridos el 18 de junio de 2012, por su probable participación en la comisión del delito contra salud y cometido contra servidores públicos.

Para soportar su dicho, la referida autoridad anexó a su informe copia simple del parte informativo correspondiente.

7. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 10 de octubre de 2012, mediante el cual el Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, informó que esa coordinación a su cargo contaba con registro de detención de QV1 por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán en fecha 18 de junio de 2012.

Añadió que los agentes efectuaron su detención por ser probable responsable de la comisión de un delito del orden federal y otros del orden común, por lo que el juez calificador que conoció del caso determinó ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, y solicitó a su vez, que esta autoridad diera vista al representante social del fuero común para que investigara el delito exclusivo de su competencia.

A fin de soportar su dicho, la referida autoridad anexó a su informe copia certificada de los siguientes documentos:

a) Oficio mediante el cual el Juez Calificador del Tribunal de Barandilla puso a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación a QV1, a la vez que le solicitó diera vista al agente del Ministerio Público del fuero común en cuanto a los hechos de su competencia.

b) Parte informativo con número de folio **** de fecha 18 de junio de 2012, suscrito por AR1 y AR2, ambos policías preventivos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

En dicho parte informativo, los agentes señalaron que se encontraban en recorrido de vigilancia a bordo de una unidad policiaca, cuando observaron a quien posteriormente resultó ser el señor QV1, quien al notar la presencia policial emprendió la huida, arrojando al suelo un cuchillo, por lo que sin perderlo de vista, iniciaron la persecución material e inmediata, logrando darle alcance, pero éste se resistió y se dio un forcejeo, logrando el detenido lesionar en la cara a un agente, para finalmente lograr someterlo, localizándole una bolsa de plástico negra que en su interior contenía vegetal verde y seca, al parecer marihuana, y catorce porciones al parecer de la droga conocida como cristal, por lo que procedieron a su detención.

c) Examen médico practicado a QV1 por un facultativo adscrito al departamento médico de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, en el cual quedó asentado que la víctima se encontraba policontundido, siendo portador de contusión parieto temporal derecha, orbicular derecha, hiperemia escleral, aumento de volumen en pómulo derecho, eritema en pómulo izquierdo, eritema en hombro derecho, además de excoriaciones lineales múltiples no recientes en tórax, aumento de volumen en tobillo derecho.

8. Oficio número **** de fecha 18 de abril de 2013, mediante el cual se solicitó a la Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos señalados por QV1.

9. Oficio número **** de fecha 18 de abril de 2013, por el cual se solicitó al agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” de la Procuraduría General de la República con sede en Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja interpuesta por QV1.

10. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 23 de abril de 2013, mediante el cual el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa II de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría General de la República, remitió copia certificada de diversas diligencias practicadas dentro de ****, entre las que figuran las siguientes:

a) Oficio número **** de fecha 11 de junio de 2012, por el cual el Juez Calificador del Tribunal de Barandilla puso a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación a QV1, anexándole examen médico y el parte informativo correspondiente.

b) Ratificación del parte informativo por parte de los agentes aprehensores AR1 y AR2, quienes a las preguntas que le fueron formuladas por el representante

social, dijeron que el detenido se resistió y que en el forcejeo lesionó a uno de los agentes en el ojo y la boca.

c) Fe ministerial de integridad física realizada por el representante social, quien dijo haber observado que el señor QV1 presentaba lesiones en su integridad corporal, anexando múltiples placas fotográficas de éste.

d) Dictamen de medicina forense practicado el 18 de junio de 2012, suscrito por un facultativo adscrito a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, el cual dijo que al examinar a QV1, éste le refirió haber sufrido golpes sobre su superficie corporal y que presentaba las siguientes lesiones:

- Equimosis de color rojo de 3.0 por 3.0 centímetros, producida por mecanismo contuso y localizada en la región parietal izquierda.
- Equimosis de 10.0 por 3.0 centímetros, producida por mecanismo contuso y localizada en la región ténporo parietal derecha.
- Excoriaciones múltiples de trazos oblicuos con presencia de costra hemática seca, producida por mecanismo deslizante, localizada en la hemicara derecha.
- Equimosis de color negruzco de 0.5 por 0.5 centímetros producida por mecanismo contuso, localizada en la comisura izquierda del parpado inferior derecho.
- Excoriaciones múltiples producidas por mecanismo deslizante localizada en la cara anterior y lateral derecha e izquierda del cuello.
- Equimosis de color rojo vinoso de 3.0 por 2.0 centímetros, producida por mecanismo contuso localizada en la región supraclavicular derecha.
- Excoriaciones en un número de tres, siendo estas de 15.0 por 1.0, 10.0 por 0.2 y 6.0 por 1.0 centímetros respectivamente, producidas por mecanismo deslizante localizadas en flanco derecho.
- Excoriaciones múltiples localizadas en ambos brazos en su cara externa, producidas por mecanismos deslizantes.
- Excoriaciones múltiples, producidas por mecanismos deslizantes, localizadas en el tórax posterior.
- Excoriaciones con presencia de costras hemáticas rojas, producidas por mecanismo deslizante, localizadas en ambas rodillas.
- Refiere dolor en maxilar inferior con limitación para movimientos de masticación, así como a la palpación.

El perito concluyó que las lesiones que presentaba no ponían en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días, y que requería de una nueva valoración en un término de 4 semanas a fin de determinar si dejarían cicatriz perpetuamente notable en la cara o no.

A modo de nota, el dictamen estaba sujeto a modificación por no contar con estudios radiológicos para determinar si existían lesiones en las articulaciones témporo maxilares (esguinces, fracturas o luxaciones).

e) Declaración ministerial de QV1, rendida ante el Ministerio Público de la Federación, quien señaló no estar de acuerdo con las imputaciones formuladas en su contra, aduciendo haber tenido problemas personales con uno de los aprehensores, que fue objeto de golpes por parte de éstos y además formuló denuncia en su contra.

f) Oficio número ****, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, dirigido al Subprocurador Regional de Justicia de la Zona Sur del Estado, mediante el cual se le hizo de su conocimiento la denuncia presentada por QV1, remitiéndole a la vez copia certificada de la ****.

11. Oficio número **** de fecha 6 de agosto de 2013, mediante el cual se requirió a la Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, respecto del informe previamente solicitado.

12. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 16 de agosto de 2012, mediante el cual la Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, rindió el informe solicitado.

13. Diversos oficios de requerimiento de información y su respuesta correspondiente por parte del Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas de la Zona Sur del Estado, en las cuales informó que al realizar una búsqueda en el Sistema de Averiguaciones Previas (SAP) no localizó indagatoria alguna en donde QV1 figure como ofendido.

14. Opinión médica recibida ante este organismo el 29 de noviembre de 2013, elaborada por el médico que apoya las labores de este organismo.

En dicha opinión, el especialista concluyó que las lesiones con las que contó QV1, mismas que están soportadas documentalmente por la intervención de expertos en la materia médica, fueron sin duda provocadas por las causas o mecanismos que éste manifestó en su queja, ya que existe suficiente evidencia que confirma la correlación existente con la agresión física que recibió y que señala le propinaron sus aprehensores.

Expediente ****

1. Escrito recibido ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos el 6 de febrero de 2013, mediante el cual el señor QV2 presentó formal queja por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, atribuidas a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

2. Oficio número **** de fecha 11 de febrero de 2013, mediante el cual se solicitó al Secretario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, el informe de ley relacionado con los actos motivo de la queja.

3. Oficio número **** de fecha 11 de febrero de 2013, por el cual se solicitó a la Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos que motivaron el inicio del expediente de queja que nos ocupa.

4. Oficio número **** de fecha 11 de febrero de 2013, mediante el cual se solicitó al Coordinador del Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

5. Oficio número **** de fecha 11 de febrero de 2013, por el cual se solicitó al agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B" de la Procuraduría General de la República con sede en Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

6. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 18 de febrero de 2013, mediante el cual la Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, remitió copia certificada de la evaluación médica practicada al señor QV2 al momento de su ingreso al mencionado centro de reclusión.

De dicha evaluación se advierte que al momento de ser examinado por el médico en turno se encontraba aparentemente sano.

7. Oficio número ****, recibido ante esta Comisión el 19 de febrero de 2013, mediante el cual el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán informó que esa dependencia a su cargo contaba con registro de detención de QV2, atento a los hechos ocurridos el 5 de febrero de 2013, por su probable participación en la comisión del delito de contra salud.

Para soportar su dicho, la referida autoridad anexó a su informe copia simple del parte informativo correspondiente.

8. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 22 de febrero de 2013, por el cual el Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, informó que esa coordinación a su cargo contaba con registro de detención de QV2, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán en fecha 5 de febrero de 2013,

quien fue puesto a disposición del juez calificador en turno, autoridad que resolvió su situación jurídica.

A fin de soportar su dicho, la referida autoridad anexó a su informe copia certificada de los siguientes documentos:

a) Oficio número **** de 5 de febrero de 2013, mediante el cual el Juez Calificador del Tribunal de Barandilla puso a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación a QV2, por la probable comisión de un delito del orden federal.

b) Parte informativo con número de folio **** de fecha 5 de febrero de 2013, suscrito por AR3 y AR4, ambos agentes de la Policía Preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

En dicho parte informativo, los agentes narraron que observaron al señor QV2, quien circulaba a bordo de una bicicleta, persona que al observar la presencia policial, trató de evadirlos acelerando la marcha, por lo que de inmediato lograron darle alcance y al realizarle un cacheo corporal, le encontraron varias bolsitas que contienen vegetal y sustancia al parecer de las drogas conocidas como cristal y marihuana, además de cartuchos para arma de fuego, motivo por el cual procedieron a efectuar la detención.

c) Examen médico practicado a QV2, por un facultativo adscrito al departamento médico de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, quien dijo que presentaba eritema en región dorsal y en ambas muñecas, así como dermoabrazión no reciente en el área del bigote.

9. Oficio número **** de fecha 11 de junio de 2013, mediante el cual se solicitó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa II de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría General de la República, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos señalados por la víctima QV2.

10. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 19 de junio de 2013, por el cual el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa II de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría General de la República, remitió copia certificada de diversas diligencias practicadas dentro de ****, entre las que figuran las siguientes:

a) Oficio número **** de fecha 5 de febrero de 2013, mediante el cual el Juez Calificador del Tribunal de Barandilla puso a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación al señor QV2, anexándole examen médico y el parte informativo correspondiente.

b) Ratificación del parte informativo por parte de los agentes aprehensores, quienes se ciñeron al contenido del mismo, sin aportar algún otro dato sobre el particular.

c) Fe ministerial de integridad física realizada por el representante social, quien dijo haber observado que QV2 presentaba una lesión a un costado del labio y raspones en ambas muñecas, anexando múltiples placas fotográficas de éste, en las cuales debe decirse que se aprecian otras lesiones en varias partes de su cuerpo.

d) Dictamen de medicina forense practicado el 5 de febrero de 2013, suscrito por un facultativo adscrito a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, el cual dijo que al examinar a QV2, éste le refirió haber sufrido golpes sobre su superficie corporal y que presentaba las siguientes lesiones:

- Equimosis de coloración rojo vinoso de 5.0 por 3.0 centímetros, producida por mecanismo contuso y localizada en el brazo derecho en su cara posterior tercio proximal.
- Equimosis de color rojo, de forma irregular producida por mecanismo contuso, localizada en el hombro izquierdo.
- Excoriación con presencia de material seroso, de 3.0 por 1.5 centímetros, producida por mecanismo deslizante, localizada en la región nasolabial izquierda.
- Excoriación de 10.0 por 5.0 centímetros, con presencia de costra hemática roja y seca, producida por mecanismo contuso, localizada en el hemitórax posterior derecho.
- Excoriaciones múltiples y de forma irregular, con presencia de costra hemática roja y seca, producidas por mecanismos deslizantes, localizadas en la pierna izquierda en su cara anterior tercio medio.
- Excoriaciones de 1.0 por 1.0 centímetros, con presencia de costra hemática seca de color café, producida por mecanismo deslizante, localizada en la rodilla derecha.

El perito concluyó que presentaba lesiones que por su naturaleza y localización son de las que tardan menos de quince días en sanar, no ponen en peligro la vida y no dejan consecuencias.

e) Declaración ministerial de QV2, rendida ante el Ministerio Público de la Federación, quien señaló que únicamente le habían sido aseguradas tres bolsitas con marihuana, y que fue golpeado sin motivo alguno por sus aprehensores en su cabeza, manos y cuello, con sus armas, además en las piernas, con sus botas. En dicha diligencia señaló su deseo de formular denuncia en contra de sus aprehensores.

f) Oficio número ****, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, dirigido al Subprocurador Regional de Justicia de la Zona Sur del Estado, mediante el cual se le hizo de su conocimiento la denuncia presentada por QV2, remitiéndole a la vez copia certificada de la ****.

11. Opinión médica recibida ante este organismo el 29 de noviembre de 2013, elaborada por el médico que apoya las labores de este organismo.

En dicha opinión, el especialista concluyó que las lesiones que presentó QV2, son compatibles en modo, lugar y tiempo, con agresión física provocada por sus aprehensores, tal como el quejoso lo afirma, toda vez que no hay indicios o evidencias documentadas de ninguna otra circunstancia que se relacione como causas de estas lesiones que presentó en su momento y que fueron dictaminadas reiteradamente por diversos médicos adscritos a dependencias oficiales.

Expediente ****

1. Escrito recibido ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos el 2 de mayo de 2013, mediante el cual Q3 hizo del conocimiento presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en agravio de V3, atribuidas a elementos de la Policía Preventiva Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

2. Acta circunstanciada de fecha 7 de mayo de 2013, por la cual el personal de esta Comisión hizo constar la aparición de la nota periodística aparecida en el portal electrónico [*****](#), relacionada con los presentes hechos, en cuyo encabezado señala “Puso a los abuelos para que les robaran su pensión”. Anexándose al expediente copia impresa de dicha publicación.

3. Acta circunstanciada de 8 de mayo de 2013, mediante la cual el personal de esta Comisión hizo constar que se comunicó vía telefónica con Q3, quien informó que V3 ya se encontraba internado en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa.

4. Acta circunstanciada de 8 de mayo de 2013, a través de la cual personal de este organismo hizo constar que se trasladó hasta el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, lugar en donde se entrevistó con V3, quien ratificó la queja interpuesta a su favor.

Dijo que una vez detenido, lo subieron a un vehículo en donde lo golpearon en las costillas, además de que lo llevaron a una casa ubicada cerca de donde está la planta termoeléctrica y que en ese lugar lo golpearon con una tabla en las nalgas por espacio de dos horas, a la vez que le preguntaban que para quién trabajaba, para finalmente ponerlo a disposición de la autoridad

correspondiente por el delito contra la salud, pero que desconocía de dónde sacaron los agentes la droga.

En dicha diligencia se dio fe de que la víctima presentaba lesiones visibles en sus glúteos y se recabaron cuatro placas fotográficas de dicha parte anatómica para mejor ilustración.

5. Oficio número **** de fecha 16 de mayo de 2013, mediante el cual se solicitó a la Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos que motivaron el inicio del expediente de queja.

6. Oficio número **** de fecha 16 de mayo de 2013, por el cual se solicitó al Secretario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, el informe de ley relacionado con los actos motivo de la queja.

7. Oficio número **** de fecha 16 de mayo de 2013, mediante el cual se solicitó al titular de la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en el Delito Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo de la Zona Sur del Estado un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

8. Oficio número **** de 16 de mayo de 2013, por el cual se solicitó al Coordinador del Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

9. Oficio número ****, recibido ante esta Comisión el 23 de mayo de 2013, mediante el cual el Encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán informó que esa dependencia a su cargo contaba con registro de detención de V3, atento a los hechos ocurridos el 1 de mayo de 2013, por su probable participación en la comisión del delito de contra salud y el diverso de robo en grado de tentativa.

Para soportar su dicho, la referida autoridad anexó a su informe copia simple del parte informativo correspondiente.

10. Oficio número ****, recibido ante esta Comisión el 27 de mayo de 2013, mediante el cual el titular de la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en el Delito Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo de Mazatlán, Sinaloa, rindió el informe en colaboración solicitado.

11. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 29 de mayo de 2013, mediante el cual la Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, remitió copia certificada de la

evaluación médica practicada a V3, al momento de su ingreso al mencionado centro de reclusión.

De dicha evaluación se advierte que al momento de ser examinado por el médico en turno se encontraba contundido con eritema y equimosis en ambos glúteos.

12. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 6 de junio de 2013, mediante el cual el Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, informó que esa coordinación a su cargo contaba con registro de detención de V3, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán en fecha 1 de mayo de 2013, quien fue puesto a disposición del juez calificador en turno, autoridad que resolvió su situación jurídica.

A fin de soportar su dicho, la referida autoridad anexó a su informe copia certificada de los siguientes documentos:

a) Oficio número **** de 1 de mayo de 2013, mediante el cual el Juez Calificador del Tribunal de Barandilla puso a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común a V3 y otro, por la probable comisión del delito contra la salud.

b) Parte informativo con número de folio **** de fecha 1 de mayo de 2013, suscrito por AR5 y AR6, ambos agentes de la Policía Preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

En dicho parte informativo, los agentes narraron que detuvieron a dos individuos que viajaban en una motocicleta, a quienes aseguraron metanfetamina, y una mochila con dos pasamontañas, dos playeras y un cuchillo, y que éstos les manifestaron que se dirigían a realizar el robo con violencia de la pensión de los abuelos de un amigo de ellos, siendo éste V3, con quien ya se habían puesto de acuerdo, y vía telefónica les había dicho que los iba a esperar –junto con sus abuelos- a bordo de un vehículo **** color **** en la gasolinera ubicada en el boulevard de la sindicatura de ****.

Señalaron que procedieron a la detención de dichas personas, y a trasladarse hasta el lugar que les indicaron, en donde pudieron observar que en ese instante se retiraba del lugar un vehículo que coincidía con las características descritas por los recién detenidos, y que por esa razón le marcaron el alto, siendo atendidos por V3, quien llevaba como pasajeros a sus ascendientes (abuela y bisabuelos), y presuntamente aceptó lo señalado por sus codetenidos, además al realizarle un cacheo corporal, se le localizó 4 bolsitas que a la postre resultaron ser metanfetamina, por lo que procedieron a su detención, a la vez

dijeron que uno de los familiares les advirtió que habían notado un comportamiento bastante extraño de parte del detenido.

c) Examen médico practicado a V1 y otro, por un facultativo adscrito al departamento médico de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, quien dijo que ambos presentaban equimosis glútear bilateral producida por contusión.

13. Oficio número **** de 8 de julio de 2013, mediante el cual se solicitó al titular de la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en el Delito Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo de de la Zona Sur del Estado un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

14. Oficio número ****, recibido ante esta Comisión el 15 de julio de 2013, mediante el cual el titular de la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en el Delito Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo de Mazatlán, Sinaloa, rindió el informe en colaboración solicitado, remitiendo diversas constancias que integran el expediente de la ****, relacionada con los hechos investigados en la presente queja.

Entre dichas documentales, destaca la declaración ministerial de V3, en donde el fiscal estatal dio fe ministerial de que presentaba hematomas de color violáceos localizados en ambos glúteos.

15. Opinión médica recibida ante este organismo el 29 de noviembre de 2013, elaborada por el médico que apoya las labores de este organismo.

En dicha opinión, el especialista concluyó que las lesiones que se encontraron y evidenciaron en V3, fueron provocadas por mecanismo contundente compatible con tablazos, estando esta aseveración fundada y de acuerdo a los indicios o evidencias indicios o evidencias que existen en el expediente y que fueron encontradas por los médicos que revisaron al detenido y que son acordes con lo que manifestó éste en su queja, encontrando correlación existente con la violencia física que el quejoso señaló que le produjeron sus aprehensores.

Expediente ****

1. Escrito de queja recibido ante esta Comisión el 21 de mayo de 2013, mediante el cual Q4 hizo del conocimiento presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de V4 y T1, atribuidas a elementos de la Policía Preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa.

2. Acta circunstanciada de fecha 23 de mayo de 2013, mediante la cual el personal de esta Comisión hizo constar que se trasladó hasta las instalaciones

del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, lugar en donde se entrevistó con V4 y T1.

En dicha diligencia, T1 no ratificó la queja interpuesta en su favor, además dijo no tener interés alguno en que este organismo iniciara una investigación al respecto.

Por su parte, V4 ratificó la queja interpuesta en su favor, y dijo que las lesiones que presentó para esa fecha ya no las tenía visibles, pero que se las produjeron sus aprehensores, las cuales consistieron en toques eléctricos en ambos glúteos, con un aparato conocido comúnmente como “chicharra”. Que dicha agresión duró aproximadamente 30 minutos, y que además no traía droga ni un cuchillo como lo afirmaron sus aprehensores.

3. Oficio número **** de fecha 28 de mayo de 2013, mediante el cual se solicitó al Coordinador del Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

4. Oficio número **** de fecha 28 de mayo de 2013, mediante el cual se solicitó al Secretario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, el informe de ley relacionado con los actos motivo de la queja.

5. Oficio número **** de fecha 28 de mayo de 2013, por el cual se solicitó a la Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos señalados por la víctima V4.

6. Oficio número **** de fecha 28 de mayo de 2013, mediante el cual se solicitó al agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” de la Procuraduría General de la República con sede en Mazatlán, Sinaloa, un informe en vía de colaboración relacionado con los actos motivo de la queja.

7. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 4 de junio de 2013, por el cual el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa I de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría General de la República, señaló que el 19 de mayo de 2013, el señor V4 fue puesto a disposición de esa autoridad por parte del agente del Ministerio Público del fuero común Especializado en el Delito Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo, por su probable participación en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Para soportar su dicho, el citado funcionario anexó a su informe copia certificada de diversas diligencias practicadas dentro de la averiguación previa 4, entre las que figuran las siguientes:

a) Oficio número **** de fecha 19 de mayo de 2013, mediante el cual el Juez Calificador del Tribunal de Barandilla puso a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común a V4 y otro.

b) Parte informativo con número de folio **** de 19 de mayo de 2013, suscrito por AR7 y AR8, ambos agentes de la Policía Preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

En dicho parte informativo, los agentes señalaron que recibieron un reporte de personas que realizaban disparos al aire, por lo que lograron ubicar a dos personas que viajaban en una motocicleta a exceso de velocidad, quienes al notar la presencia policial, trataron de evadirlos, logrando darles alcance, solicitándoles descendieran de la motocicleta, localizándole a V4, un cuchillo tipo cazador y varias bolsitas con vegetal que a la postre resultó ser marihuana, asimismo a su codetenido se le localizó un arma de fuego y marihuana, por lo que procedieron a su detención.

c) Dictamen médico suscrito por un facultativo adscrito al departamento médico de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, quien dijo que al examinar a V4, se encontraba sin huellas de lesiones físicas aparentes.

d) Dictamen de medicina forense, suscrito por un facultativo adscrito a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, el cual dijo que al examinar a V2, éste le refirió haber sufrido agresión física al momento de su detención por los agentes que lo detuvieron, manifestándole que le golpearon los genitales y lo quemaron con una chicharra eléctrica, y que presentaba las siguientes lesiones:

- Múltiples quemaduras de forma puntiforme de 0.2 por 0.2 centímetros de dimensión, de fondo apergaminado, producidas por trauma eléctrico, localizadas en ambos glúteos con predominio en el glúteo izquierdo.

El perito concluyó que presentaba lesiones que por su naturaleza y localización son de las que no ponen en peligro la vida y tardan menos de quince días en sanar.

e) Oficio número ****, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, dirigido al Subprocurador Regional de Justicia de la Zona Sur del Estado, mediante el cual le solicitó investigara el presunto maltrato del que fue objeto V2 y su codetenido, atendiendo a la solicitud expresa que la defensora

pública federal le hizo por la vía de los alegatos que en su momento formuló, remitiéndole a la vez copia certificada de la averiguación previa 4.

8. Oficio número **** de 12 de junio de 2013, mediante el cual se requirió a la Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, respecto del informe previamente solicitado.

9. Oficio número **** de 12 de junio de 2013, mediante el cual se requirió al Coordinador del Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respecto del informe previamente solicitado.

10. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 22 de junio de 2013, mediante el cual la Directora del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Sinaloa, remitió copia certificada de la evaluación médica practicada a V4 al ser ingresado al mencionado centro de reclusión.

De dicha evaluación se advierte que al momento de ser examinado por el médico en turno, le encontró múltiples costras mielínicas y manchas hipocrómicas en glúteos.

11. Oficio número ****, recibido ante esta Comisión el 12 de julio de 2013, mediante el cual el Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, rindió el informe de ley solicitado y remitió diversas documentales cuyo contenido se describió en el punto 7 próximo pasado del cuerpo de la presente resolución.

12. Oficio número **** de 8 de julio de 2013, por el cual se requirió al Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán respecto del informe previamente solicitado.

13. Oficio número ****, recibido ante este organismo el 19 de julio de 2013, mediante el cual el Encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán informó que esa dependencia a su cargo contaba con registro de detención de V4, por parte de elementos a su mando en fecha 19 de mayo de 2013.

A fin de soportar su dicho, la referida autoridad anexó a su informe copia certificada del parte informativo correspondiente.

14. Opinión médica recibida ante este organismo el 29 de noviembre de 2013, elaborada por el médico que apoya las labores de esta Comisión.

En dicha opinión, el especialista concluyó que las lesiones que presentó V4 fueron ocasionadas de acuerdo a lo que manifestó éste en su queja, al ser

compatibles en modo, lugar y tiempo, con agresiones físicas provocadas por sus aprehensores, toda vez que no existen indicios o evidencias documentadas de ninguna otra circunstancia que se relacione como causa de estas lesiones que presentó la víctima y que fueron dictaminadas reiteradamente por diversos médicos oficiales.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

Los señores QV1, QV2, V3 y V4 fueron detenidos en diferentes eventos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán al haber sido presuntamente sorprendidos en flagrancia delictiva.

Posterior a su detención, y como un procedimiento administrativo de rigor, la autoridad policiaca los puso a disposición del Juez Calificador del Tribunal de Barandilla de Mazatlán, y éste a su vez, al Ministerio Público correspondiente.

Sin embargo, durante el tiempo en que QV1, QV2, V3 y V4, permanecieron a disposición de los elementos de la mencionada corporación policiaca, fueron objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes que dejaron secuelas visibles en su superficie corporal, todo lo cual quedó debidamente documentado en autos, atento a los expedientes que se analizan en la presente resolución.

Tal acción llevada a cabo por las autoridades señaladas como responsables en perjuicio de la integridad física y la seguridad personal de las señaladas víctimas, materializan la violación a sus derechos humanos que por esta vía se les reprocha.

IV. OBSERVACIONES

En constantes resoluciones la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa ha realizado especiales pronunciamientos relacionados con el hecho de que los servidores públicos deben realizar sus deberes dentro del marco establecido por la normatividad de la que se compone el orden jurídico mexicano.

Cuando cualquier autoridad se aparta de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que rigen el servicio público, peor aún si con ello se causa la afectación de cualquier ciudadano, sin duda es una situación que debe corregirse y prevenirse a través de los medios previstos por el propio Estado.

DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS: A la integridad física y a la seguridad personal

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Malos tratos

La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos.¹

El orden jurídico por el que se rige el Estado mexicano contempla una serie de normas que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Así pues, el propio artículo 1° de nuestra Carta Magna, en su párrafo tercero, dispone literalmente lo siguiente:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

En términos similares se pronuncian los diversos 1 y 4 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, al establecer que el Estado tiene como fundamento y objetivo último, la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales que le son inherentes, los cuales vinculan a todos los poderes públicos.

Ahora bien, planteado que fue el caso, y al no existir duda alguna respecto a que cualquier autoridad o servidor público, tiene el deber de respetar los derechos humanos de toda persona, resulta en un imperativo para esta Comisión el hacer un análisis de la conducta de acción desplegada por AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, todos agentes de policía adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, que como quedó acreditado en las investigaciones realizadas por esta Comisión, causaron malos tratos a QV1, QV2, V3 y V4, así como de las disposiciones que de manera específica violentaron dichos servidores públicos.

En relación a las quejas que nos ocupan, a juicio de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ha quedado acreditado que los señores QV1, QV2, V3 y V4, sí sufrieron de malos tratos por parte de sus agentes aprehensores.

¹ Ríos Estavillo Juan José, Bernal Arellano Jhenny Judith, “Hechos Violatorios de Derechos Humanos en México”, Editorial Porrúa. Pág. 11.

Tal afirmación se realiza en virtud de que como ya quedó precisado en párrafos precedentes, los señalados como víctimas fueron detenidos en diversos hechos que acontecieron en los años dos mil doce y dos mil trece, por policías preventivos adscritos a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.

Posterior a su detención, todos alegaron haber sido objeto de agresión física sin motivo aparente durante el tiempo que permanecieron bajo la custodia de la autoridad policiaca. En razón de ello, y previa queja recibida presentada por parte de los inconformes, esta Comisión inició las investigaciones pertinentes, encontrando lo siguiente:

Que posterior a su detención, QV1, QV2, V3 y V4, invariablemente fueron valorados por un médico adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, por peritos adscritos a las agencias del Ministerio Público del fuero común o del fuero federal, según fue el caso, y por médicos adscritos al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, siendo así como quedaron dictaminadas e identificadas de manera oficial las lesiones que cada uno presentaba en su integridad corporal, regularmente como consecuencia de agresiones físicas provocadas.

Igualmente, en algunos de los casos, tales lesiones fueron observadas por el propio representante social que conoció del hecho, en otros, el personal de este organismo pudo observar y documentar de manera fotográfica la evidencia que sirve para sustentar la presente resolución.

En ese sentido, aun cuando en líneas anteriores ya quedaron detalladas las lesiones que presentaba cada una de las personas aquí señaladas como víctimas de malos tratos, mencionaremos a modo de síntesis y para el inmediato análisis de cada uno de los hechos, lo siguiente:

El señor QV1 al ser valorado por el médico adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán fue encontrado **policontundido**, siendo portador de contusión parieto temporal derecha, orbicular derecha, hiperemia escleral, aumento de volumen en pómulo derecho, eritema en pómulo izquierdo, eritema en hombro derecho, además de excoriaciones lineales múltiples no recientes en tórax y aumento de volumen en tobillo derecho.

A su vez, el fiscal federal dio fe de la integridad corporal de QV1 observándole lesiones y recabó placas fotográficas. El perito médico oficial adscrito a la Procuraduría General de la República, dijo que al examinarlo presentaba una **equimosis** de color rojo de 3.0 por 3.0 centímetros, producida por mecanismo contuso y localizada en la región parietal izquierda, otra **equimosis** de 10.0 por 3.0 centímetros, producida por mecanismo contuso y localizada en la región tèmpero parietal derecha, **excoriaciones** múltiples de trazos oblícuos con

presencia de costra hemática seca, producida por mecanismo deslizando, localizada en la hemicara derecha, una **equimosis** de color negruzco de 0.5 por 0.5 centímetros producida por mecanismo contuso, localizada en la comisura izquierda del parpado inferior derecho, **excoriaciones** múltiples producidas por mecanismo deslizando localizada en la cara anterior y lateral derecha e izquierda del cuello, un **equimosis** de color rojo vinoso de 3.0 por 2.0 centímetros, producida por mecanismo contuso localizada en la región supraclavicular derecha, **tres excoriaciones**, siendo estas de 15.0 por 1.0, 10.0 por 0.2 y 6.0 por 1.0 centímetros respectivamente, producidas por mecanismo deslizando localizadas en flanco derecho, **excoriaciones múltiples** localizadas en ambos brazos en su cara externa, producidas por mecanismos deslizantes, **excoriaciones múltiples**, producidas por mecanismos deslizantes, localizadas en el tórax posterior, **excoriaciones** con presencia de costras hemáticas rojas, producidas por mecanismo deslizando, localizadas en ambas rodillas y **dolor** en maxilar inferior con limitación para movimientos de masticación, así como a la palpación.

Respecto de las lesiones que presentaba, los agentes de policía dijeron que QV1 se había resistido al arresto, incluso dijo que había logrado lesionar a uno de los aprehensores.

Por su parte, la víctima adujo que trató de huir al estar siendo agredido de manera indiscriminada por los agentes del orden, y que con uno de ellos había tenido problemas previamente, incluso señaló que nunca agredió al agente del orden, sino que éste se golpeó solo con una vara de mangle.

A ese respecto, si bien es cierto que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades encargadas de cuidar el orden en el país (autoridades policiales específicamente), pueden hacer uso de la fuerza a efecto de someter a las personas que se intenta detener, cuando éstas se resisten, y por tanto, las lesiones que resulten de tal sometimiento no podrán imputarse como actos de tortura y malos tratos.

Sin embargo, en el presente caso advertimos que las lesiones que presentaba QV1, rebasan toda acción razonable de uso legítimo de la fuerza, pues no se trata sólo de lesiones propias del acto de sometimiento, sino que estamos ante la presencia de un sujeto que se encontró poli contundido con lesiones en diversas partes de su cuerpo.

En ese sentido, se advierte que en el caso de la detención de QV1, estamos ante la presencia de un uso ilegítimo y excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía, ya que durante la detención de una persona a quien se le atribuye una conducta delictiva, la autoridad policiaca que la realiza, bajo ninguna circunstancia puede ejercer sobre ésta fuerza desproporcionada, salvo la estrictamente necesaria para su sometimiento.

Amén de lo anterior, no podemos pasar por alto que la detención se efectuó por dos agentes de policía, quienes además se encuentran capacitados para el uso racional y apegado de la fuerza, y que para el caso de detenciones pueden utilizar tácticas o técnicas policiales de sometimiento, lo cual evidentemente no ocurrió en el presente caso.

Ahora bien, por lo que hace a QV2, al ser valorado por el médico adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, fue encontrado con eritema en región dorsal y en ambas muñecas, así como dermoabración el área del bigote, tales lesiones fueron también advertidas por el fiscal federal, además de que dicho funcionario recabó placas fotográficas en donde se observan otras lesiones.

El perito médico oficial adscrito a la Procuraduría General de la República, dijo que QV2 al examinarlo presentaba **equimosis** de coloración rojo vinoso de 5.0 por 3.0 centímetros, producida por mecanismo contuso y localizada en el brazo derecho en su cara posterior tercio proximal, **equimosis** de color rojo, de forma irregular producida por mecanismo contuso, localizada en el hombro izquierdo, **excoriación** con presencia de material seroso, de 3.0 por 1.5 centímetros, producida por mecanismo deslizante, localizada en la región nasolabial izquierda, **excoriación** de 10.0 por 5.0 centímetros, con presencia de costra hemática roja y seca, producida por mecanismo contuso, localizada en el hemitórax posterior derecho, **excoriaciones** múltiples y de forma irregular, con presencia de costra hemática roja y seca, producidas por mecanismos deslizantes, localizadas en la pierna izquierda en su cara anterior tercio medio y **excoriaciones** de 1.0 por 1.0 centímetros, con presencia de costra hemática seca de color café, producida por mecanismo deslizante, localizada en la rodilla derecha.

Respecto de las lesiones que presentaba, los agentes de policía nada señalaron respecto a que QV2 se hubiere resistido a su detención; por su parte, al rendir su declaración ministerial, la mencionada víctima dijo que fue golpeado sin motivo alguno por sus aprehensores en su cabeza, manos y cuello, con sus armas, además en las piernas, con sus botas.

En lo que respecta a V3, fue entrevistado por personal de esta Comisión, señalando que había sido detenido y llevado a una casa en donde fue golpeado en sus glúteos con una tabla de madera; el personal de esta Comisión pudo observar y fotografiar que presentaba lesiones visibles en sus glúteos y se recabaron placas fotográficas.

Por su parte, al ser valorado por los médicos adscritos al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, ambos coincidieron en que V3 presentaba lesiones en sus glúteos, ya

que el primero lo encontró contundido con eritema y equimosis en ambos glúteos y el segundo dijo que presentaba equimosis glútea bilateral producida por contusión. A su vez, al rendir su declaración ministerial, el representante social del fuero común dio fe de que éste presentaba hematomas de color violáceos localizados en ambos glúteos.

Por su parte, las lesiones que presentaba V3, del parte informativo y su posterior ratificación ante el representante social, se advierte que su detención ocurrió de manera espontánea, es decir, ordenaron detuviera su vehículo, éste lo hizo, se bajó a atender el llamado de la autoridad, y fue así como lo detuvieron, tampoco se señala nada respecto a que se haya resistido al arresto.

Finalmente, en lo que atañe a V4, fue entrevistado por personal de esta Comisión, señalando que había sido agredido físicamente mediante toques eléctricos que le propinaron los agentes de policía en ambos glúteos, con un aparato conocido comúnmente como “chicharra”.

Tal versión se acreditó esencialmente con el dictamen médico que emitió el perito adscrito a la Procuraduría General de la República, quien dijo que V4 presentaba múltiples quemaduras de forma puntiforme de 0.2 por 0.2 centímetros de dimensión, de fondo apergaminado, producidas por trauma eléctrico, localizadas en ambos glúteos con predominio en el glúteo izquierdo.

Debe decirse que V4 también fue examinado por el médico adscrito al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, quien igualmente lo encontró con lesiones en sus glúteos, señalando que presentaba múltiples costras mielínicas y manchas hipocrómicas en glúteos.

También en este caso, en relación a las lesiones que presentaba V4, del parte informativo y su posterior ratificación ante el representante social, se desprende que su detención ocurrió sin que se haya resistido al arresto.

Sumada a la evidencia recién detallada, debe tenerse en cuenta que en los cuatro hechos que en esta vía se analizan, en los que se llevó a cabo la detención de QV1, QV2, V3 y V4, el médico que apoya las labores de esta Comisión estudió la evidencia correspondiente, emitiendo sendos dictámenes en los que concluyó que éstos si sufrieron agresión física por parte de los aprehensores como ellos lo afirman, al ser compatibles las lesiones que presentaron con la forma en que dijeron se las provocaron, y por no existir dentro de cada caso, alguna otra circunstancia que se relacione como causante de esas lesiones.

En relación a todo lo anterior, cabe hacer notar que el derecho humano a la integridad física y de seguridad personal es un derecho ampliamente reconocido y protegido por los artículos 16, 19 y 22 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por diversos instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna, dentro de ellos, por el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los cuales se asienta el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral y la prohibición expresa de afectar a las personas tales derechos.

También la Constitución Política local en su artículo 4° Bis B, fracción IV, establece el derecho de toda persona habitante en el Estado de Sinaloa a disfrutar una vida libre de violencia, lo cual exige implícitamente a todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley a no hacer uso de la violencia durante la detención de una persona.

Tales preceptos indudablemente fueron violentados por los agentes de la Policía Preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.

Otras disposiciones violentadas por AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, son las siguientes:

- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 40, fracción IX.
- Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sinaloa, en su 36, fracciones IV y VIII.
- Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, en su artículo 131, fracción I y II.
- Bando de Policía y Buen Gobierno de Mazatlán, en su artículo 45, fracciones I y V.

Tales cuerpos normativos de los tres niveles de gobierno, regulan de manera específica la función de seguridad pública y establecen los deberes mínimos que las instituciones policiales deberán observar en el desempeño de sus funciones, entre las que figuran el deber ineludible de velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, en tanto las ponen a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente, y la estricta prohibición para los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el maltratar a los detenidos en cualquier momento, sea cual fuere la falta o delito que se les impute y atentar por cualquier acto a los derechos consagrados en la Constitución Federal o la del Estado.

Respecto del caso que nos ocupa, resulta conveniente citar lo señalado en la siguiente tesis jurisprudencial:

“ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el cargo oficial encomendado a un miembro de la policía para efectuar una detención, no le confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia ilegal sobre el

individuo a quien va a detener, aún en el supuesto de que éste opusiera resistencia, máxime si se atiende a que, conforme al párrafo final del artículo 19 constitucional, todo maltrato en la aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, que debe ser corregido por las autoridades, ahora bien, los policías pueden repeler las agresiones injustas, actuales, implicativas de un peligro inminente y grave, no por aquella calidad, sino como simples individuos humanos; pero para que la excluyente de legítima defensa opere, deben darse necesariamente los elementos antes dichos.

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: LXII, Segunda Parte

Tesis:

Página: 9

Precedentes

Amparo directo 6770/61. Joaquín Bueno Montoya y coags. 13 de agosto de 1962. 5 votos. Ponente: Alberto R. Vela.”

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Seguridad jurídica

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Prestación indebida del servicio público

Conforme al párrafo final del artículo 19 de nuestra Carta Magna, todo maltrato en la aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, que debe ser corregido por las leyes y reprimido por las autoridades.

Por su parte, el diverso 109 de la Constitución Federal, establece que los servidores públicos al ejercer indebidamente sus atribuciones pueden incurrir en responsabilidad política, penal o administrativa. En similares términos se pronuncia el artículo 130, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Atento a ello, debe decirse que la conducta de acción que en esta vía se reprocha a las autoridades señaladas como responsables, pudiera ser constitutiva de delito, conforme a las diversas disposiciones contenidas por el Código Penal del Estado de Sinaloa, y en razón de ello, las autoridades competentes ya se encuentran investigando al respecto, a excepción del caso ventilado en el expediente número **** relacionado con el caso de V3, en donde no obra constancia alguna de que ello esté ocurriendo.

Por otro lado, los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, realizaron y actualizaron hechos violatorios de derechos humanos al no seguir lo que establece la Constitución Federal en relación a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos al llevar a cabo la

función de seguridad pública, pudiendo también ser objeto de sanciones administrativas, como más adelante se explicará.

En ese sentido, el artículo 21, noveno párrafo de la misma Constitución, señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala y que la actuación de las instituciones de seguridad pública deberá regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la mencionada Constitución. En similares términos se pronuncia en su artículo 73, la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

La prestación indebida del servicio público siempre le será atribuida a un servidor público, y en ese sentido, no existe duda alguna de que los agentes de la Policía Preventiva de Mazatlán tienen la calidad de servidores públicos, atento a lo estipulado por el artículo 130 de la Constitución Política Local, que dice que es toda aquella persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, y organismos e instituciones municipales, entre otros.

En este sentido, es necesario puntualizar que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos que se deriva de los actos u omisiones en que incurrir en el desempeño de sus atribuciones la contempla la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Dicha ley, en su numeral 3, establece que los servidores públicos en ejercicio de su función serán sujetos de responsabilidad administrativa cuando incumplan con sus deberes o incurran en las conductas prohibidas señaladas en esta ley, así como en aquellas que deriven de otras leyes y reglamentos.

A su vez, en su diverso 14, señala que los servidores públicos, en el desempeño de sus funciones tienen la obligación de conducirse ajustándose a sus disposiciones contenidas en la propia ley, para salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, entre otros.

En contrapartida, el actuar violentando alguno de estos principios, necesariamente implica un exceso o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado, el cual deberá necesariamente ser sujeto de alguna responsabilidad.

Finalmente, a propósito del caso que nos ocupa, señalaremos algunos deberes que dejaron de observarse con la conducta atribuida a los servidores públicos señalados como autoridades responsables en la presente resolución, y cuya inobservancia, debe ser motivo de responsabilidad administrativa, atendiendo a las disposiciones contenidas en la propia ley.

Así pues tenemos que el artículo 15, fracciones I, VIII, XXXIII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en las que señalan los siguientes:

“Artículo 15. Todo servidor público, tendrá los siguientes deberes:

Fracción I. Cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

.....
Fracción VIII. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tengan relación en el desempeño de su función; y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad.

.....
Fracción XXXIII. Abstenerse de realizar cualquier conducta de coacción psicológica que atente contra la integridad física o psicológica de una persona.”

Lo anterior, con independencia de las distintas disposiciones contenidas en el Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, que evidentemente están obligados a observar los agentes de la policía preventiva señalados como autoridades responsables en la presente resolución, y cuya inobservancia debe ser igualmente motivo de responsabilidad administrativa, por medio de sanción o remoción de su empleo, cargo o comisión, atento al régimen jurídico especial de Servicio Profesional de Carrera Policial al que se encuentran sujetos.

Así pues, tendríamos que los servidores públicos señalados como autoridades responsables en la presente resolución, por lo menos, violentaron el Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, en sus artículos 4, 131, fracciones I, II, XVIII y XXII y 132, fracción XVII último párrafo, los cuales señalan lo siguiente:

“**ARTÍCULO 4.** Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de prevención de infracciones administrativas y delitos que le competen a la Policía Preventiva, Policía de Tránsito y Protección Civil de la Secretaría; los de legalidad, objetividad, eficiencia,

profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; debiendo fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de la Ley General, el presente reglamento y demás leyes aplicables.

ARTÍCULO 131. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Policías Preventiva y de Tránsito de la Secretaría se sujetarán a las siguientes obligaciones:

I. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;

II. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
.....

XVIII. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico, respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
.....

XXII. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario
.....

“ARTÍCULO 132. Además de lo señalado en el artículo anterior los integrantes de la Secretaría, tendrán las obligaciones comunes siguientes:

Fracción XVII último párrafo.
Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.”

Por todo lo anterior y como consecuencia de ello, es necesario que tales hechos sean investigados por el correspondiente órgano interno de control y en virtud de lo anterior se apliquen las sanciones administrativas que conforme a derecho procedan de manera independiente de la responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido los agentes aprehensores.

Con base en lo expuesto anteriormente y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en nuestra entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis, segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa de manera respetuosa se permite formular a usted, señor Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, como autoridad superior jerárquica, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Sírvase girar la instrucción correspondiente a efecto de que al considerar los actos que motivaron la presente investigación, así como los razonamientos expuestos por esta Comisión Estatal, se inicie el procedimiento administrativo en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, elementos policiacos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, quienes intervinieron en la detención de QV1, QV2, V3 y V4, de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y el Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, a fin de que se impongan las sanciones que resulten procedentes. Asimismo se informe a este organismo el inicio y conclusión del o los procedimientos correspondientes.

SEGUNDA. Se dé vista al agente del Ministerio Público del fuero común, única y exclusivamente por lo que hace a los hechos relacionados con el expediente número ****, relacionado con el caso de V3, a fin de que inicie la averiguación previa respectiva, quien analizando el actuar de los agentes de policía que intervinieron en su detención, determine si los hechos puestos de su conocimiento son o no constitutivos de delito y resuelva lo que conforme a derecho proceda.

TERCERA. Se lleven a cabo acciones inmediatas para que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, sea instruido y capacitado respecto de la conducta que deban observar en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos fundamentales de todo ser humano, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución.

CUARTA. Se dé a conocer el contenido de la presente Recomendación entre los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, ello con el ánimo de evitar la repetición de los actos similares a los que por esta vía se reprocha.

VI. NOTIFICACIÓN Y APERCIBIMIENTO

La presente Recomendación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes, para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsanen las irregularidades cometidas.

Notifíquese al ingeniero Carlos Eduardo Felton González, Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, de la presente Recomendación misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 20/2015, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuenta con un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, para que manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder

las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Asimismo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma de fecha 10 de junio de 2011, que menciona en su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado, ya que se traduce en la no aceptación del mencionado pronunciamiento.

Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional.

En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero, del multicitado artículo 1º constitucional.

Es importante mencionar que de una interpretación armónica al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 100, párrafo tercero del Reglamento Interno de la misma, cuando una autoridad o servidor público acepta una recomendación, asume el compromiso de dar a ella su total cumplimiento.

Ahora bien y en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese a QV1, QV2, V3 y V4, en su calidad de víctimas, dentro de la presente Recomendación, remitiéndoles con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO